



Consejo Económico y Social

Distr. general
27 de noviembre de 2012
Español
Original: inglés

Comisión de Desarrollo Social

51º período de sesiones

6 a 15 de febrero de 2013

**Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social
y del vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General: tema prioritario: promoción del
empoderamiento de las personas para lograr la erradicación
de la pobreza, la integración social y el pleno empleo y el
trabajo decente para todos**

Declaración presentada por las Hermanas de la Misericordia de las Américas, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.



Declaración

Con ocasión del 51° período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, las Hermanas de la Misericordia de las Américas, que trabajan en más de 40 países del mundo entero, lamentan públicamente la falta de respeto hacia el empoderamiento de los pueblos y el medio ambiente ocasionado por una dependencia excesiva del modelo de desarrollo capitalista y la codicia desenfrenada de esos gobiernos e industrias extractivas que asignan más valor a la ganancia que a la vida. A medida que la brecha entre ricos y pobres se amplía, no solo se desempodera a las personas, sino que se pone en riesgo su propia vida. En mayor escala, esa lamentable situación desgarrar el tejido social de la comunidad, siembra discordia y engendra violencia. Este modelo de economía impulsada por el crecimiento y de desarrollo no sostenible no solo desempodera a sus pueblos y ciudades y erosiona su cohesión social sino que, de manera más devastadora aún, destruye la propia cultura que tiende al bienestar de la toda la comunidad de vida.

Tema prioritario y testigo personal

En este momento decisivo, las Hermanas de la Misericordia acogen con agrado el tema prioritario de la Comisión. Teniendo en cuenta la experiencia de larga data de nuestros miembros, se trata de una oportunidad para rechazar el mito promovido por algunos gobiernos y corporaciones según el cual el desarrollo social y sostenible y la erradicación de la pobreza solo se lograrán mediante la explotación de los recursos naturales y el desarrollo económico.

Por el contrario, la experiencia de nuestros miembros revela de manera contundente que los costos de una explotación de los recursos naturales y un desarrollo descontrolados pesan muchísimo más que cualquier beneficio para la comunidad local. La noción generalmente aceptada de que todos se benefician de la riqueza que promete la industria minera es errónea. La cruda realidad es una economía basada en los recursos naturales que genera ingresos para algunos consumidores y deja al resto en la miseria. Los modelos vigentes de desarrollo basados en las industrias extractivas suelen desempoderar a las personas y perpetuar el desempleo, la pobreza, la discordia y la violencia. El sistema que generó esa desigualdad ha tenido graves consecuencias que los Estados no han enfrentado.

Con demasiada frecuencia, nuestros miembros han sido testigos de la forma en que los gobiernos sucumben al poder de persuasión de las empresas mineras, haciendo caso omiso de las responsabilidades gubernamentales que tienen con las comunidades. So capa de “desarrollo”, se distorsionan o modifican leyes o se hace caso omiso de ellas para responder a las exigencias de esas empresas, usurpando así los derechos de las personas. Según nos informan nuestros miembros, con frecuencia los gobiernos han vendido a empresas mineras los recursos potenciales futuros de sus países. Aún cuando los gobiernos han intentado defender su obligación de proteger a su población y el medio ambiente (como es el caso de El Salvador), los tratados comerciales han permitido a las empresas extranjeras interponer recursos contra esos gobiernos por violar su derecho a realizar beneficios.

Nuestros miembros también nos informan de que las comunidades están fracturadas y las familias de los mineros se ven afectadas adversamente por las condiciones de trabajo impuestas en aras de una mayor productividad. Además, los

residentes han sido objeto de abusos de los derechos humanos por haber protestado contra un proyecto de construcción de una mina, que temían que contaminara el medio ambiente y perjudicara a sus medios de subsistencia.

Desempoderamiento de los pueblos

La competencia de las empresas mineras por el acceso a la tierra, el agua y la energía menoscaba gravemente el derecho de la comunidad al desarrollo, la salud y los medios de vida. En lugar de beneficiarse de las actividades extractivas, la comunidad sufre la pérdida de valiosos recursos agrícolas, forestales e hídricos que durante siglos han constituido su patrimonio.

La forma más atroz de desempoderamiento de los pueblos y comunidades indígenas ocurre cuando las empresas se niegan de manera habitual a cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales y no consultan debidamente con las comunidades para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Los gobiernos se hacen cómplices de ese proceso de desempoderamiento cuando no facilitan a la población los mecanismos ni el espacio político necesarios para que los interesados participen directamente en la adopción de decisiones relativas a los beneficios y las cargas de la explotación de los recursos naturales para las comunidades y las generaciones futuras. Con demasiada frecuencia, el modelo de extracción se presenta a la comunidad como la mejor forma de lograr el desarrollo económico y social.

Violaciones de los derechos humanos

Se suele silenciar a las voces discrepantes. Tanto los agentes estatales como los no estatales son culpables del desempoderamiento social, económico, jurídico y político de comunidades locales. Los actos de hostigamiento, aislamiento y tipificación como delincuentes contra quienes protestan son demasiado comunes y lamentablemente van en aumento. Casi sin excepción, los países donde viven nuestros miembros y donde la extracción de recursos naturales es una prioridad para el crecimiento económico suelen cuestionar el derecho de una persona a la libre determinación y a protestar y manifestarse contra los métodos peligrosos de extracción de recursos naturales. Cada vez más se profieren amenazas o se asesina a los activistas que se pronuncian contra la extracción de petróleo y gas y contra injusticias en la actividad minera. Con demasiada frecuencia, los Estados faltan a su obligación de prevenir o remediar esas situaciones y de empoderar a la comunidad para crear un marco justo, sostenible y equitativo para el desarrollo y la erradicación de la pobreza.

No transparencia

Por último, la falta de transparencia, incluida la negativa a revelar los pagos efectuados a los gobiernos por las empresas de industrias extractivas, desempodera aún más a las personas al denegarles el acceso público a información sobre ingresos y transacciones conexas en sus países y comunidades locales. Esa falta de transparencia y rendición de cuentas se ha vinculado directamente a un aumento de la pobreza en los países ricos en recursos, debido a que los ingresos procedentes de esos recursos salen de esos países para beneficiar principalmente a las empresas y sus accionistas.

No obstante, nuestros miembros celebran los avances más recientes en transparencia y rendición de cuentas mediante la divulgación pública de las regalías, las bonificaciones y los derechos pagados y el establecimiento de organismos nacionales de supervisión en el marco de iniciativas voluntarias, como la campaña Publiquen lo que Pagan y la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas. Además, nuestros miembros encomian las novedades más recientes en relación con la Ley Dodd-Frank de los Estados Unidos de América, que exige a las empresas multinacionales que cotizan en Wall Street que revelen sus pagos a los gobiernos extranjeros por la explotación de sus recursos naturales. Para realizar más plenamente el empoderamiento de las personas y la erradicación de la pobreza, la Unión Europea, el Canadá y otros países deberían seguir el mismo ejemplo y adoptar normas rigurosas y vinculantes para la presentación de informes sobre la contabilización de los pagos en concepto de explotación de recursos naturales.

Recomendaciones

Instamos firmemente a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros a que:

a) Realicen un estudio empírico de las Naciones Unidas del impacto humano, social y ambiental de las industrias extractivas en las comunidades locales a fin de establecer una normativa e influir de manera decisiva en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015, la aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

b) Exijan a los gobiernos e industrias extractivas que cumplan sus obligaciones internacionales de ceñirse a un proceso transparente y responsable de consentimiento libre, previo e informado¹ en todas las negociaciones con los pueblos indígenas a lo largo del ciclo de la minería. En las negociaciones con las comunidades no indígenas también debe aplicarse un proceso igualmente riguroso;

c) Cumplan las obligaciones internacionales para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en relación con las consecuencias humanas y ambientales de la explotación de los recursos naturales, incluidos el derecho de las personas a la libertad de asociación y reunión pacífica, de expresión de opinión, y de acceso a información sobre proyectos de minería. Los instamos, al mismo tiempo, a que garanticen la protección de quienes realizan manifestaciones pacíficas contra el uso de la fuerza dañina y hagan cumplir las sanciones impuestas a quienes usen esa fuerza;

d) Adopten normas rigurosas y vinculantes para la presentación de informes sobre la contabilización de los pagos en concepto de explotación de los recursos naturales; y establezcan metas significativas para el aprovechamiento de los ingresos netos en moneda extranjera y los impuestos generados por las industrias extractivas a fin de financiar inversiones en el sector social y promover la diversificación de la economía y los medios de subsistencia, además de programas de reducción de la pobreza.

Instamos firmemente a las empresas de las industrias extractivas a que:

¹ Véase el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los artículos 15 y 16 del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

a) Cumplan sus obligaciones jurídicas contraídas con los pueblos indígenas de aplicar el proceso de consentimiento libre, previo e informado a lo largo del ciclo de extracción de los recursos naturales, y permitan la observación y verificación por terceros de la idoneidad de ese proceso. Apliquen procesos igualmente rigurosos en todos sus tratos con las comunidades no indígenas;

b) Divulguen de manera pública y periódica, en el idioma autóctono de la comunidad de que se trate, los resultados completos de los estudios independientes que se realicen sobre los efectos para el medio ambiente y los derechos humanos de todos los proyectos de extracción, incluido el proceso para la eliminación de los desechos y los cierres de minas previstos, en cuanto a la salud y el bienestar de la comunidad, la tierra, el agua y los ecosistemas vitales;

c) En los casos en que la población apruebe la extracción de recursos naturales, ofrecerle la oportunidad de adquirir las aptitudes, la formación y el empleo necesarios para que disfruten de las ventajas que entrañan las industrias extractivas.

Conclusión

Hasta que las industrias extractivas no estén jurídicamente obligadas a adoptar mecanismos de desarrollo sostenible vinculantes en los planos nacional e internacional que se basen en los derechos humanos, y hasta que no se les penalice por incumplir esas obligaciones, habrá comunidades enteras que seguirán quedando desempoderadas y sin protección ante la destrucción de las garantías de desarrollo económico, social y ambiental que por derecho les corresponden.

El empoderamiento de las personas es la mejor garantía para asegurar la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. En las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem Pillay, el derecho al desarrollo es un derecho humano para todos, y los pueblos indígenas tienen derecho a definir y determinar su propio desarrollo ... asegurémonos de que el desarrollo para algunos no vaya en detrimento de los derechos de otros.

Nuestra humanidad común exige que no hagamos menos.

Nota: La declaración está respaldada por las siguientes organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social: la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, Dominican Leadership Conference, Passionists International, Pax Christi International, Salesian Missions, Sisters of Notre Dame de Namur, UNANIMA International y VIVAT International.